

# EL FORO VALENCIANO,

REVISTA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

Esta Revista se publica los días 1 y 15 de cada mes.

Se suscribe en Valencia en el centro de suscripciones plaza de la Constitucion, y en la imprenta de José Rius, plaza de San Jorge. Fuera, dirigiéndose á la Redaccion del *Foro Valenciano*, calle de Salinas, núm. 16, remitiendo el importe de la suscripcion en sellos de franqueo ó libranzas del giro mútuo.—PRECIO DE SUSCRICION: 3 rs. al mes en Valencia y 8 por bimestre fuera, franco de porte.

## LA JURISPRUDENCIA Y LA ECONOMÍA POLÍTICA.

### REIVINDICACION DE EFECTOS PÚBLICOS AL PORTADOR.

Saben nuestros lectores que existe en Madrid un círculo científico titulado: Sociedad de Economía Política, la cual celebra sesiones en que se discuten temas ó cuestiones interesantes del dominio de aquella ciencia, respecto á las cuales se complacen en ilustrarse mutuamente los distinguidos miembros que la componen. Es una de tantas cosas de que se puede disfrutar en la Corte, en los grandes centros, y que solo pueden remedarse en la provincia: por esto quizá, mas que por ningun otro motivo, es una esclencia de los tiempos modernos la de la prensa periódica, que permite asistir, como si dijéramos, en espíritu, al foco de la civilizacion de un pais, á todos aquellos á quienes una grande distancia impide hallarse presencialmente en él.

En la sesion de dicha Sociedad, que tuvo lugar el 12 de Marzo último, fue el tema puesto á discusion:—«¿Puede el Estado en algun caso autorizar la reivindicacion de efectos públicos al portador hecha á nombre de antiguos tenedores? ¿Ataca esta reivindicacion las bases fundamentales del crédito público?»

Trataro desta cuestion bajo el aspecto económico con la erudicion y criterio que en tales personas son de suponer, nuestro apreciable amigo D. Joaquin María Sanromá, catedrático de la Escuela de Comercio de Madrid, y el

Sr. D. Luis María Pastor, decidiéndose ambos por la no reivindicacion. Fundábase el primero en que esa reivindicacion mataria el crédito público, cuyas bases fundamentales ataca, hiriéndole en el corazon; y tambien en la distincion que hace la ley entre inscripciones nominativas transferibles por medio del endoso, y no nominativas transferibles sin aquel requisito. «El crédito es una virginidad, dijo el Señor Sanromá, no recobra su flor perdida:» y esto despues de haber dicho respecto al otro extremo: ó seguridad con el estorbo de la transferencia en regla, ó facilidad con el riesgo de la intransferencia. «El riesgo significa algo en los términos de la ley; luego en los términos de la ley las reivindicaciones no existen.»

El Sr. Pastor, en un todo conforme, respecto á la reivindicacion, con el orador que le precediera, pero con el objeto de diversificar su discurso para mayor ilustracion de la materia, se fundó mas principalmente en la dificultad que ofrecen para la identificacion los títulos al portador, y en que la invencion de éstos es muy posterior á las doctrinas, que rigen en materia de reivindicaciones, procedentes del derecho romano. «No existe, dijo el orador, una legislacion espresa á que atenerse en las transacciones é incidencias á que dá lugar la existencia de los documentos al portador.»

No permite, debemos empezar diciendo nosotros, la índole de este periódico tratar cuestiones de Economía Política en el terreno de esta ciencia, ni es ésta la primera vez que



nos ha contenido esa valla. Pero las ciencias se dan con frecuencia la mano, y en el examen de muchas cuestiones, á menudo, se rozan unas con otras. Vamos, pues, á examinar la misma cuestion bajo el aspecto puramente jurídico. Vamos á demostrar que el Derecho y la Economía concuerdan en no permitir la reivindicacion contra un tercer poseedor de buena fe de los títulos de la deuda pública al portador: y que si razones de conveniencia social aconsejan que no se autorice esa reivindicacion por una nueva ley, razones de justicia y de derecho estricto impiden que se otorgue por los tribunales fundándose en la legislacion vigente.

Para ello debemos basar nuestra opinion en principios puramente jurídicos y prescindir de las consideraciones meramente económicas. Porque claro es: si la reivindicacion de que hablamos fuese justa, poco importaria que atacase las bases fundamentales del crédito. No por eso solo deberia prohibirse, antes ese hecho seria una prueba irrecusable de que aquellas bases no eran las que debieran ser. Del mismo modo, si las doctrinas de la reivindicacion, procedentes, como se dice, del derecho romano, están basadas en la equidad ó en la justicia, que en esencia son una misma cosa; poco importa que éstas hayan sido de antiguo reconocidas y admitidas, ni que sea muy moderna la creacion de los efectos públicos al portador.

Los jurisconsultos distinguen los derechos que existen en el dominio de los hombres, (como objetos de riqueza en language económico) por las *acciones* que para hacerlos valer se pueden deducir en juicio. Estas acciones se llaman *reales* ó *personales* segun que es la cosa ó la persona quien ha de responder de sí ó del cumplimiento de una obligacion. Segun esto, los tenedores legítimos de efectos públicos, que tienen el derecho de percibir, en las épocas marcadas, los intereses correspondientes á la cantidad que representan aquellos efectos, y los cuales ha de pagar el Estado, poseen un derecho, no real sino personal en language ju-

rídico; el derecho de exigir del Estado el cumplimiento de la obligacion consignada en los mismos *efectos públicos*, obligacion que es peculiar del Estado y que de nadie mas se puede reclamar. Pero la propiedad legítimamente adquirida de los títulos ó documentos especiales en que se halla consignada aquella obligacion, constituyen un derecho real que recae sobre los mismos títulos, los cuales si sufren extravio ó sustraccion fraudulenta, donde quiera que se hallen, subsisten esclavos, en el dominio del que sin justa causa se halla desposeído. Segun estos principios, que son los mas triviales del derecho, pero cuya indicacion no es aquí ociosa por la aplicacion que haremos de ellos, los efectos públicos pueden reivindicarse como cualquiera otra cosa de las que existen en el dominio de los hombres.

Mas el derecho civil reconoce otros muchos principios, que se compadecen muy bien con los enunciados, y entre ellos el de que en materia de contratos *pactos son leyes*: por él todos los que los contrayentes impongan y acepten han de respetarse y cumplirse, con tal que sean lícitos, debiendo los tribunales, cuando fueren requeridos, asegurar á las partes interesadas su cumplimiento, ya conminando al que se niega á cumplirlos, ya negando su ausilio al que sin fundada razon solicita su insubsistencia. Ahora bien; la ley, como observa el Sr. Sanromá, al crear dos clases de títulos de la deuda, nominativos y al portador, ha querido diferenciarlos esencialmente entre sí, pues de lo contrario bastaba haberlos creado de una sola clase; y donde esta diferencia resalta mas, porque precisamente ha de ser así, es en los efectos que produce, en las manifestaciones que permite la propiedad y posesion de unos y otros. Decimos que precisamente ha de ser así, porque esos efectos son los que declaran y deslindan con toda fijeza la naturaleza de cada uno de aquellos, lo cual importa mucho conocer, porque la naturaleza de las cosas no puede variarse ni por la voluntad de los individuos, ni por la errónea calificacion, si



existiese, de los tribunales. Examinemos un momento la naturaleza de unos y otros títulos en lo respectivo á los efectos de su propiedad.

Poseo un título de la deuda correspondiente á una inscripcion nominativa, el cual adquirí legitimamente. La propiedad que tengo en este título es perfecta; no se puede confundir con la que otra persona tiene en otro título de la misma especie. En aquel título está consignada una obligacion del Estado á mi favor exclusivamente, ó á favor de la persona á quien conste por una *transferencia* imprescindible que yo le he trasmitido. ¿De qué aprovecha este título á un tercero que lo posea por hallazgo ó sustraccion? Sin mi endoso ó transferencia en regla no puede ser dueño de él. Del mismo modo; ¿quién, con buena fe, puede adquirir ese título de un injusto detentador por compra, cambio, dacion en pago, etc.? No constando por transferencia, que yo haya cedido su propiedad, nadie puede ser sorprendido ni llamarse á engaño. La reivindicacion, pues, de un título de esta clase es fácil, obvia, procedente, justa, en manera alguna puede perjudicar á un inocente.

Poseo empero otro título de la deuda al portador, y respecto á éste, todo cambia de aspecto; la situacion es completamente diversa, porque la naturaleza de uno y otro título es diametralmente opuesta. Cuando reivindico el título de una inscripcion nominativa recobro tan solamente la materialidad del documento, no el derecho que yo tenia contra el Estado; la obligacion de éste á mi favor consignada en aquel documento, á mi favor subsistia á pesar de su extravío, y á nadie, que en tiempo y sazón se hubiese presentado á reclamar en las oficinas del Estado el cumplimiento de aquella obligacion, se hubiese atendido en ellas no constando mi asentimiento por medio de la transferencia. Por el contrario, si me fuera dado reivindicar un título al portador, no recobraría solo la materialidad del documento sino el derecho contra el Estado, porque siendo este anexo á la posesion ó simple tenencia del título, hasta ésta para po-

der exigir del Estado el cumplimiento de la obligacion en aquel documento consignada. ¿No aparece bien claramente la diferencia entre unos y otros títulos, y que los llamados al portador no pueden reivindicarse? Por si acaso no desliamos mas nuestra idea.

Al crear el Estado títulos de la deuda por medio de inscripciones nominativas, celebra un contrato con todos los que quieran adquirir títulos de esa clase, en virtud del cual contrae una obligacion, *no para con todos sino para con cada uno*; nótese bien esto: por el contrario, al crear títulos al portador el Estado celebra igualmente un contrato, en cuya virtud *se obliga á todos indistintamente, pero á ninguno en particular*. En el primer caso me dice el Estado: contraigo esta obligacion á tu favor, y á su debido tiempo te la cumpliré religiosamente: puedes disponer de tu derecho transfiriéndole con mi conocimiento á quien bien te plazca; que á su debido tiempo esta obligacion, que contraigo, la cumpliré tan religiosamente á quien tú hayas hecho la transferencia y tras de ti cualesquiera otros legítimos adquirentes, como á ti. En el segundo caso me dice el Estado; he contraído una obligacion, no á tu favor ni de nadie, sino á favor de todos y de cada uno; en tiempo oportuno cumpliré mi obligacion á quien se presente con este título que te entrego: á esto me obligo, á nada mas; de este modo me obligo, no de otro; esto y de este modo es lo que tú aceptas y lo que en ti aceptan todos los que han de poseer ese título: esto es lo que pactamos y convenimos; jamás tú ni yo podremos revelarnos contra este nuestro mútuo consentimiento: no esperes que ninguna ley te proteja si tal intentas, ni que tribunal alguno te atienda, si pretendieres obligarme á alterar lo pactado.

Es, pues, evidente que puede llegar un día en que presentándose N. al Estado con títulos al portador para los efectos legales, esté aquel en el caso de decirse: Segun avisos que he recibido y ciertos signos que advierto en



estos títulos, han sido robados. No sé quién los ha robado, ni si el que los presenta los adquirió bien ó mal. Nada de esto me importa. Los tribunales cuidarán de averiguar los delitos, castigar á los delincuentes, etc. Por mi parte, no soy aquí mas que un deudor; he contraído una obligacion á favor del portador de estos títulos; éste es su portador, se la cumplo. Asimismo es evidente, que si, en el caso supuesto, se presenta F. y dice al Estado: Me han sido robados unos títulos al portador números *tal y tal*, série *cual*; cuando se presenten será fácil reconocerlos por tales signos que les tenia yo puestos: retenlos en tu poder; aquel estará en el caso de responderle: No te conozco.—Es que me han sido robados.—A los tribunales. No te conozco; y si no eres portador, nada te debo, nada he contratado contigo.

Hagamos por último hablar al tribunal: A las resultas de una causa, que estoy instruyendo sobre robo de ciertos títulos al portador que se distinguen con *tales* señales, te mando retenerlos cuando se presenten.—No te obedeceré, porque no puedes mandarme eso.—Te lo mando en tu mismo nombre.—No puede ser. He celebrado un contrato lícito y solemne; mi crédito y mi reputacion, que valen mucho, penden de su exacto cumplimiento. No puedes en mi nombre mandarme que pierda mi honra.—Te lo mando en interés de la justicia.—No puede ser. La justicia exige que se cumplan las obligaciones lícitas solemnemente contraídas, no que se falte á ellas.—Tu negativa favorece á los robadores de efectos públicos; y si en ella insistes diré que proteges á los criminales.—No puede ser que tal digas; pues entonces yo podría llamarte asesino porque con tus sentencias quitas la vida á quien lo merece. Persigue tú los delitos; castiga á los criminales que roben títulos al portador; pero déjame á mí cumplir mis obligaciones, pues son honestas. Y cuando algun desposeído de títulos al portador te pida su reivindicacion, dile que no son reivindicables, no porque nadie lo mande, sino porque su esen-

cia no lo permite, ni lo consiente la naturaleza del contrato de que provienen.

Y en efecto; en este contrato tácito, pero no menos real y valedero, que la emision de títulos de la deuda al portador entraña, se contiene el pacto lícito, terminante y sin limitacion de que el Estado reconocerá por dueño de tales títulos al que sea portador de ellos y no á otro. ¿Si el robado no es portador cómo exigir que se le reconozca por dueño? ¿No fuera alterar aquel pacto, no fuera variar esencialmente aquella promesa, que es absoluta, convertirla en condicional, añadiéndole una limitacion, cualquiera que sea? Se dirá que esa limitacion se sobrentiende siempre y en todas las cosas, porque con el robo no se adquiere el dominio ó la propiedad de una cosa. Perfectamente. Eso mismo queremos nosotros, que al robador de títulos de esa clase no le aproveche su delito. Pero no se trata de éste, sino de un tercero, cuarto ó sexto que adquirió los títulos con buena fe, comprándolos al precio de la plaza, sin el menor motivo que justificase en él una sospecha respecto á la procedencia de aquellos títulos. ¿Será justo que se los arrebatase nadie? ¿Quién le indemniza de su desembolso? ¿Puede acaso reconvenir de eviccion al que se los vendió? ¿Y qué eviccion cabe en semejante caso? ¿No fue la cualidad de portador lo que compró?

Nada ocurre que oponer á estos reparos. La consecuencia de tal reivindicacion seria hacer mas desgraciado al que tuvo la fortuna de que un ladrón no atentara á su propiedad, que á quien hubiese sido burlado por la industria de un malhechor.

Por último, llegados á este terreno se ocurre naturalmente la razon alegada por el señor Pastor en la citada sesion, la cual podemos considerar tambien del dominio de la jurisprudencia. ¿Cómo se justifica la identidad de los títulos? ¿Por señales arbitrarios que para poderlos reconocer les puso un poseedor que mientras tuvo esta precaucion no supo evitar el ser robado? Se dirá que por la numeracion y



série ¿pero puede bastar esto? ¿Cómo se justifica la preexistencia de los títulos en el dominio del reclamante, cuando la propiedad de esos efectos se trasmite *brevi manu*, como se dice en el foro, ó sea por la simple mútua entrega de la cosa y del precio? Demos, empero, que todo se prueba; mas aun, que el reo está convicto y confeso: ¿cómo se evita la confabulación, posible por mas que sea improbable, para defraudar á un tercero que de buena fe posee cuantiosos valores en títulos al portador, que un tiempo estuvieron en poder y dominio de los confabulados?

De cualquier modo que se examine la cuestion, bajo el aspecto económico, bajo el jurídico, en la aplicacion ó práctica, siempre dará el mismo resultado: la conviccion de que los títulos al portador son irreivindicables por su naturaleza ó esencia. Y es de tal eficacia esta causal (aunque no nos detengamos á demostrarlo) que aun la ley espresa no conseguiria con la mas terminante declaracion hacer esos títulos reivindicables. Lo que conseguiria con ello fuera abolirlos. Su precio bajaria en el mercado, rápidamente, hasta cero, y quedarían fuera del comercio y de la circulacion.

Roman J. Brusola.

## CONVENIENCIA Y PELIGROS

DE POPULARIZAR

la doctrina fundamental de las leyes.

Aventurado parece el nombre que damos á estas lineas, cuando la tendencia del siglo es individualizarlo todo, para huir del escollo tan temido, el monopolio. Pero no va nuestra intencion derecha á ese derrotero; que lleva un propósito menos candente, si bien mas trascendental, y si es posible mas útil y práctico.

### I.

En un largo período de las sociedades, el saber las leyes fue patrimonio esclusivo de las castas privilegiadas.

Las antiguas gentes divididas por una línea de hierro, formaban dos grupos de distinta fisonomía y condiciones; llevando por enseña el uno la autoridad y la fuerza, y la paciencia, la servidumbre y el trabajo, el otro.

Tal situacion hacia indiferente la ignorancia de las leyes, porque los sujetos á la servidumbre, para nada tenían necesidad de ellas, y el pueblo vivia en general subordinado á la presion del fanatismo pagano, y á la idolatría del genio.

Esas sociedades que pasaron, fuertes por la virilidad de una organizacion no gastada por los vicios de la refinada civilidad de otros tiempos, se contentaron con escribir pocas leyes, que se guardaban como un rico tesoro, y de las que solo era lícito saber sus preceptos mas generales, quedando á las inspiraciones de la conciencia individual, el acertar lo necesario para no incurrir, ó en las sanciones escritas, ó en las que se dieran misteriosamente por los sacerdotes de los ídolos.

Hubo sin embargo, pueblos, que en el templo y en la plaza tenían abierto, para conocimiento de todos, el Código de sus leyes; pero su explicacion y su espíritu quedaba rodeado de un misterio, que hacía sagrado el respeto que se las debe.

Pudiéramos decir que la sociedad ha pasado por tres edades, cuyos rasgos característicos podrian significarse por el predominio del genio, del sentimiento y de la razon.

La admiracion de las grandes acciones debia producir un freno de carácter especial en aquellas generaciones, en que la virgen imaginacion de las primeras edades suplía con la fuerza del genio, y con el respeto al héroe, la falta de armonía y regularidad gubernamental de los pueblos.

Un hombre simbolizaba una época; daba nombre, y prestigio, y fuerza y razon de sér á un pueblo. Era el lazo de unidad, en sociedades sin coesion ni régimen uniforme, y en la que los instintos y necesidad de conservacion



formaban los elementos de su vida colectiva.

No hay que medir la manera de ser de los pueblos antiguos, por lo que despues han sido y son los estados modernos.

Así tampoco sus necesidades ni sus costumbres han sido las mismas; ni los medios sociales, ni las garantías políticas y morales han podido tener igual carácter.

Los hombres han cedido siempre á influjos semejantes, de igual manera, y con parecidas ó idénticas condiciones.

Ha sido la sociedad dócil instrumento de las ideas que han dominado.

Vemos sencillas costumbres, reducidas necesidades económicas en la sociedad; semejantes son el organismo y los medios que el orden político necesita usar.

Encontramos muelles costumbres, refinados deseos, apetitos insaciables de lujo, de poder; la política y todos sus resortes para regimenter y dirigir la sociedad, se hacen de vez en vez mas complicados y difíciles, y los individuos tienen que tomar parte en las funciones del régimen público.

La participacion en la confeccion de las leyes, y la necesidad de conocerlas y sus doctrinas, se miden por relaciones aproximadas á las ideas que quedan asomadas, y que se ven fácilmente en los párrafos anteriores.

## II.

Pero si la fisonomía característica de los pueblos nos esplica los hechos que pasan, y si las ideas se amoldan á condiciones radicales, no pueden por menos de sufrir grandes modificaciones, todas las necesidades, todas las manifestaciones, todas las costumbres, cuando aquellas se presentan.

La vida de los pueblos en que la religion del genio suplía á la del sentimiento, debia tener soluciones distintas; así como éste sin estar sujeto á verdades constituidas á priori, se deberia encontrar propenso y en peligro de abismarse en confuso laberinto de escitaciones, y en la

pendiente de un abismo. Nuestra sagrada religion dió esa enseñanza, que sirve de pauta, de nivel y de criterio.

El Código de los deberes, que el hombre que puede levantarse sobre sus pasiones encuentra gravado en su conciencia por una mano poderosa con caractéres enérgicos y decididos, se halla allí con dulces y consoladoras máximas y preceptos escrito para todos.

Abrióse un nuevo camino á las sociedades, y desde entonces no han podido, ni podrán confundir su vida y su accion, con la accion y la vida individual: que no volverán á hacer del individuo, ni un siervo, ni una máquina, ni un mecanismo armónico, que obre sin libertad propia, sino por la que le comunique la colectividad libre. El individuo sabe ya que tiene deberes, que le están impuestos por un poder cuyas fuerzas no puede combatir; que ha de cumplir si ha de ser buen ciudadano, buen padre, buen individuo; y de que tiene que responder, como sér libre y árbitro de sus acciones, á Dios y á la sociedad.

Las leyes tienen desde ese momento una sancion nueva, desconocida, y la santidad de los deberes viene como en eficaz auxilio á la falta de su ciencia.

Así ha corrido un largo período la sociedad, durante el cual, sin embargo, se han hecho costosos experimentos, para sacudir el yugo de los deberes, que es pesadísimo para el que quiere andar á la suelta y á la desbandada.

La razon no podia estar quieta y sosegada, porque veia venirle encima un temporal desatado y amenazadora tormenta. El origen y fundamento de las leyes trata de averiguarse; esto era resultado necesario, despues de haberse desprestigiado por muchos la importancia de los deberes.

Entran los pueblos en una nueva lucha: lucha de opiniones, de discusion, de sistemas; en muchas ocasiones, de confusion, de duda completa, de desvarío.

Pregúntase por la razon de todo, y cada



uno se considera con suficiente criterio para negar el valor y sus quilates á la experiencia, al juicio, á los largos estudios.

Comienza una grande elaboracion científica y social; pero con pretensiones absolutas y abandonando elementos necesarios, de que no puede prescindir ni la sociedad ni la ciencia.

Por lo que será el tiempo venidero, se descuida á veces lo presente; mas entre tanto el tiempo en que vivimos tiene sus necesidades, reclama algo útil y conveniente para él; pide que el talento sea provechoso para lo presente, sin que olvide á las generaciones venideras.

Las necesidades nuevas, los complicados intereses creados y que se desarrollan, y la nueva vida civil han complicado el organismo político y gubernamental, siendo preciso acudir preventiva, represiva y protectivamente, por medio de la legislacion á garantizar multitud de relaciones desconocidas unas, abandonadas ó despreciadas otras, necesarias de fomentarse multitud de ellas y que no tenian ocasion en los tiempos pasados.

La legislacion se ha complicado: cada cual necesita saber el precepto legal ¿hasta esto en el período social que atravesamos?

### III.

La sociedad presente no tiene para el genio, ni para el héroe la admiracion y el respeto, que el entusiasmo que glorifica, pueden tributarle.

El sentimiento del deber, que quiere reabilitarse á fuerza de razonamientos, se le ha tratado de despojar ó debilitar al menos su mas segura salvaguardia, la religion.

Faltan dos de las sanciones que aseguraban el respeto á las leyes. Por esto su doctrina se procura estenderla y ponerla al alcance de todos: porque cada uno, siguiendo la lógica de la época, no se contenta con saber el precepto, quiere penetrar y conocer su razon y su fundamento, para satisfacer una necesidad del espíritu.

Quizá la escuela histórica pretende llenar aquel vacío y suplir este medio, con la sancion del tiempo, tomando á éste por grande elabora-

dor que da su fruto en ocasionazonada comunicándolo por medio de las costumbres.

Pero la escuela antagónica á ésta, sigue rumbo diverso, y hasta en la forma presenta á las leyes necesitadas de la ayuda de la doctrina, para desenvolver el precepto, formulado con las mas precisas frases, y sin dar la razon de su contenido, que debe encontrarse en la ciencia.

Este mismo motivo, es sin embargo, la causa de los peligros que corre y ocasiona semejante método.

Por eso hemos creido siempre necesitada de gran experiencia, prudencia y tacto la empresa de difundir la doctrina de las leyes.

La esplicacion de su precepto, para fijar su sentido, la esposicion y solucion de las cuestiones á que su inteligencia puede dar ocasion, son ocupaciones y tareas útiles y provechosas sin disputa.

La discusion de los graves motivos de la ciencia; la fijacion de la doctrina y la difusion de ésta para popularizarla, es cosa ocasionada á mil peligros: porque aun cuando la tendencia y fin de la ciencia sea realizarse en utilidad y provecho de todos, no todos están en disposicion de comprender, ni la dialéctica ni el idioma científico, ni sus fórmulas.

Todo lo que se siga sin el encadenamiento científico á los que carecen de antecedentes para ello, ha de tomarse, y aprenderse y realizarse en el concepto y forma mas material y grosera, perdiéndose de esa manera el fruto de la actividad de la inteligencia, y de la aplicacion y estudio de los hombres pensadores.

Hasta hoy se encuentran rodeados de inconvenientes todos los medios ensayados para llamar al individuo á que obre dentro de la órbita de su condicion sociable.

Tampoco se ha tropezado con ninguna solucion que haga innecesarias las leyes, y de que convenza que el hombre obra rectamente conducido por la sola noción de su derecho.

Ni la confianza que deben inspirar los legis-



ladores escogidos por los pueblos, ni la publicidad de la discusion para aprender y conocer los motivos, satisface ni contenta á todos. No hay confianza sin duda en el criterio adoptado, ó se hace necesario que á nutrirlo y perfeccionarlo vengan otros elementos que le faltan.

La sociedad actual se encuentra en un estado de duda, de vacilacion que espanta; porque la duda es la inquietud para el espíritu, la enemiga de la paz, la desesperacion para el corazon, la aniquilacion de la conciencia. Es el veneno del alma, la ocasion del suicidio para el cuerpo.

Para atajar el mal, para curarlo si es posible, sin renegar á los adelantamientos de la ciencia y de la sociedad, se necesita revestir de prestigio á los poderes públicos, dar un criterio constante al individuo, purificar su conciencia y darle vigor con creencia poderosa, segura y no vacilante.

La ciencia del derecho encontrándose con estas condiciones, puede con seguridad echar la planta firme, para construir el edificio de las leyes.

Estas serán recibidas como las reglas necesarias de respetar, como garantía de los derechos, como las condiciones indispensables para alcanzar el desenvolvimiento, progreso y perfeccionamiento social posibles.

Así obrando el individuo dentro del círculo de las garantías legales, coadyuvando la órden social con el cumplimiento de sus deberes, conseguirá la realizacion de su personalidad y su derecho; y podrá, mediante su actividad, desenvolverse en sus relaciones morales, económicas y políticas, de una manera conveniente y hacedera.

(Del Foro Sevillano.)—Manuel del Campo y Oviedo

## Crónica de los Tribunales.

### Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.

#### RECURSOS DE CASACION.

*Gaceta del 22.* Declarando haber lugar al interpuesto contra la sentencia de la Real Audiencia

de esta Corte, en pleito sobre que se declarase válida la dimision de un censo reservativo.

*Fundamentos del recurso.* Haberse infringido la doctrina legal que en general autoriza la dimision de la hipoteca para extinguir los censos, cuando de la finca censida se hizo espresa referencia en la escritura de imposicion ó reconocimiento; en corroboracion de esta ley 8.<sup>a</sup>, tit. 15, libro 19 de la Novísima Recopilacion, que se refiere á la dimision de la finca acensuada, y la cita como doctrina en que no hay contradiccion.

*Jurisprudencia establecida.* Que el censatario puede librarse del gravámen del censo y de la obligacion de reconocerlo y de satisfacer sus réditos, dimitiendo la cosa censida; estando el censalista obligado á admitir esta dimision, si bien con la justa reserva de su derecho en caso de desperfectos abusivos. Que esta doctrina legal se refiere á toda clase de censos, como claramente se deduce de la citada ley de la Novísima Recopilacion y la 9.<sup>a</sup>, que la subsigue en el mismo título y libro.

*Gaceta del 25.* Confirmando el auto apelado de la Real Audiencia de esta Corte, denegatoria de la admision del recurso de casacion interpuesto en autos de peticion de alimentos provisionales.

*Motivos de la sentencia.* Que aquella sobre que recae el recurso, fue dictada en juicio sumárisimo, al que no pone término ni hace imposible su continuacion, porque no impide al demandante de renovar su demanda, arreglándose á lo prescrito para ella en la ley de Enjuiciamiento civil.

*Gaceta del 29.* Confirmando el auto apelado de la Real Audiencia de la Coruña, denegatorio del recurso de nulidad interpuesto en litigio sobre exencion de prestaciones que tenian un origen señorial.

*Motivos de la sentencia.* Que estando fuera del término de la ley de aquel recurso, no era procedente su admision, sin que respecto á el lapso de aquel término pueda concederse el beneficio de restitucion.

*Gaceta del 30.* Declarando no haber lugar al recurso de casacion interpuesto contra la sentencia de la Real Audiencia de Mallorca, en pleito sobre reivindicacion de bienes procedentes de un vínculo.

*Fundamentos del recurso.* Haberse infringido la voluntad del fundador, que es ley en la materia; la Real pragmática de 5 de Abril de 1815, segun la cual seria necesaria la exclusion espresa del fundador para negar al recurrente la preferen-



cia sobre su adversario en el orden de suceder; todas las doctrinas esplanadas por Castillo Sotomayor en el cap. 6.º, lib. IV, disertacion 87, sobre fideicomisos por el Cardenal de Lucca.

*Jurisprudencia establecida.* Que la voluntad del fundador, á la cual está arreglada la sentencia combatida, es la ley en la materia.

*Gaceta del 31.* Declarando no haber lugar al interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de Guerra y Marina de la audiencia Pretorial de la Habana, en autos sobre la existencia ó no del arrendamiento de ciertos terrenos.

*Fundamentos del recurso.* Haberse infringido la doctrina legal de que las contratas se interpretan por medio de las cláusulas esenciales y expresivas del consentimiento; y las leyes 2.ª, tit. VIII, Partida V, y 1.ª, título XVI, libro X de la Novísima Recopilacion.

*Jurisprudencia establecida.* Que cuando sobre una materia se ha pronunciado clara y terminantemente una ley, no hay términos hábiles para que una doctrina surta respecto al mismo punto efecto de la casacion. Que los fundamentos del recurso de casacion deben sacarse de la parte preceptiva de sentencia y no de las materias incidentales que en la expasitiva se mencionen.

*Gaceta del 3.* Declarando no haber lugar al interpuesto contra la sentencia de la Real Audiencia de Sevilla que decide á favor del Juzgado de primera instancia del distrito de San Antonio de Cádiz la competencia suscitada con el tribunal de Comercio de la misma ciudad sobre conocimiento de los autos promovidos para la cobranza de un pagaré.

*Fundamento del recurso.* Que habiendo intervenido en el espresado pagaré comerciantes matriculados como enclausantes, se infringió en el artículo 454 del Código de comercio que reputa este acto mercantil; y como tal de la competencia de los tribunales de esta clase, quebrantándose con la decision contraria todas las prescripciones legales en la materia.

*Jurisprudencia establecida.* Que no teniendo por objeto el préstamo garantido y realizado á medio del pagaré, ninguna operacion mercantil, no puede ser calificado como acto de comercio.

#### Competencias.

*Gaceta del 28.* Decidiendo á favor del Juzgado de primera instancia de Cieza, provincia de Murcia, la suscitada con el de Santa Cruz de Tenerife, sobre conocimiento de una demanda que te-

nia por objeto la cancelacion de una escritura de venta.

*Motivos de la sentencia.* Que siendo personal la accion entablada, es Juez competente, en primer término, el del lugar donde debió cumplirse la obligacion.

*Gaceta del 30.* Decidiendo á favor de la Administracion la suscitada entre el Gobernador de la provincia de Toledo y el Juez de Hacienda de la misma, sobre egecucion de una sentencia y pago de cantidades contra el Ayuntamiento de la villa de Escalona.

*Motivos de la decision.* Que los créditos contra los Ayuntamientos, una vez declarados, deben ser incluidos en el presupuesto municipal para su pago, siendo de la incumbencia de la Administracion el cumplimiento de dicha obligacion, solicitándola así los interesados.

*Gaceta del mismo dia.* Decidiendo á favor del Juzgado de primera instancia del distrito de San Roman de la ciudad de Sevilla la suscitada por el del tercio de Marina de la misma, acerca del conocimiento de una demanda sobre pago de 1,450 reales vellon.

*Motivos de la sentencia.* Que el carácter de la obligacion por la persona que la contrajo, era completamente extraño á la jurisdiccion de Marina.

*Gaceta del 4.* Decidiendo á favor del Juzgado de primera instancia de Tafalla la suscitada por el de la Capitanía general de Navarra, acerca del conocimiento de una causa formada á un Teniente de Caballería por atentado contra el Alcalde de Barrasoain.

*Motivos.* Que los Alcaldes egercen funciones permanentes de Justicia, produciendo por consiguiente desafuero, los desacatos y atentados contra ellos cometidos.

#### Consultas del Consejo de Estado.

##### DECISIONES DE PLEITOS.

*Gaceta del 22.* Declarando subsistente una pension concedida por Real orden de 2 de Marzo de 1855 á un facultativo, en consideracion á los servicios prestados por el mismo durante la invasion del cólera-morbo en varios pueblos de la provincia de Córdoba.

*Motivos de la decision.* Que siendo la referida pension concedida en consideracion á servicios reales y efectivas para las que por regla general se habia prometido esta clase de recompensa, no merece aquella la calificacion de dudosa, y no



procede, por tanto, la suspension de pago en que se la habia comprendido.

*Gaceta del 23.* Absolviendo á la Administracion de una demanda producida por un empleado cesante en la que reclama mejora de clasificacion apoyándose en haber disfrutado un sueldo mayor del que se toma por regulador de la cesantia que se le declara.

*Motivos.* Que para que un sueldo se tome como regulador es requisito indispensable, además del nombramiento Real ó de las Cortes, el que se halle comprendido en el presupuesto general del Estado. Que es tambien preciso que el destino cuyo sueldo hubiese de servir como regulador se haya desempeñado dos años. Que ninguna de estas circunstancias se reune en el demandante.

*Gaceta del 24.* Absolviendo á la Administracion de una demanda interpuesta con la R. O. de 16 de Noviembre de 1854 por la que se mandó aplicar la ley de 1.º de Agosto de 1851 á la satisfaccion de ciertos créditos, y reservando á la parte demandante los derechos que pueda tener contra quien viere conveniente para el reembolso de una libranza de 25,400 pesos fuertes que no pueden admitirse como crédito contra el Estado.

*Motivos.* Que los créditos mandados abonar están comprendidos dentro de la espresada ley. Que el crédito rechazado no fue presentado en término oportuno por el portador de la libranza y habiéndose ya practicado con éste la correspondiente liquidacion, no puede ser el Estado responsable de sus operaciones.

*Gaceta del 26.* Declarando nulo todo lo actuado ante el Consejo y Diputacion provincial de Almería, por incompetencia de jurisdiccion, en pleito sobre pastos y aprovechamiento de los montes situados dentro de los términos de ciertos pueblos de aquella provincia.

*Motivos.* Que dirigiéndose la demanda con que fue despachado este asunto, en una parte, á obtener la revocacion de las reales órdenes dictadas sobre el mismo, corresponde al Consejo de Estado conocer las reclamaciones que en este sentido se produjeron; y encaminándose, en otra, á obtener la propiedad y plenaria posesion de los derechos disputados, deben conocer de estos estremos los tribunales ordinarios.

*Gaceta del 29.* Absolviendo á la Administracion de la demanda interpuesta por un auxiliar del Tribunal de Cuentas del Reino contra la Real orden en que se hace su clasificacion para cesantia.

*Motivos de la decision.* Que el tiempo recla-

mado por el demandante para mejora de su clasificacion no fue servido en plaza de ley ó reglamento, ni por nombramiento de las Cortes, Real ó de Real delegacion.

*Gaceta del 30.* Absolviendo á la Administracion de la demanda interpuesta por un sargento segundo cesante del resguardo militar de Cataluña, contra la Real orden en que se le declara sin derecho á cesantia.

*Motivos.* Que el destino servido por el demandante, tanto á su ingreso como á su salida de él, no daba derecho á cesantia.

*Gaceta del 31.* Declarando subsistente la pension concedida á la viuda de un Capitan de infanteria.

*Motivos.* Que los servicios prestados por el difunto esposo de la recurrente deben considerarse como importantes y comprendidos por consiguiente en el decreto de las Cortes de 12 de Mayo de 1837, que declara subsistentes las pensiones que tengan á su favor dicha circunstancia.

*Gaceta del 2.* Mandando sobreseer en el promovido por una sociedad minera contra una Real orden de nulidad de su demarcacion, y cumplir esta Real orden; todo por desistimiento de la espresada sociedad.

*Motivos de la decision.* Que con el desistimiento del demandante no contradicho por demandado fenece el pleito.

*Gaceta del 3.* Absolviendo á la Administracion de la demanda interpuesta contra dos Reales órdenes de negatorias de ciertos intereses reclamados sobre un capital de vales reales, consignadas en fianza.

*Motivos.* Que en las Reales mencionadas, se hizo buena aplicacion de la de 22 de Abril de 1854, que niega á los depósitos en vales el abono de intereses.

#### **Recurso de nulidad.**

*Gaceta del 28.* Declarando no haber lugar á decidir el interpuesto contra una providencia del Tribunal superior de Cuentas de la Isla de Cuba, en incidente de un espediente de la competencia de este Tribunal.

*Motivos de la decision.* Que estos recursos solo están concedidos sobre las sentencias de calificacion en los espedientes de cuentas; no pudiendo por consiguiente admitirse en los asuntos incidentales que, como el presente, nacen de aquellas.



**Recursos de injusticia notoria.**

*Gaceta del 31.* Declarando haber lugar á lo interpuesto contra la sentencia dictada por la Real Audiencia de esta Corte, en autos mercantiles sobre abono de honorarios devengados en la liquidacion de una compañía de comercio; y absolviendo á la misma compañía de la demanda, con ciertas reservas á favor del demandante.

*Fundamentos del recurso.* Haberse infringido la naturaleza gratuita del mandato; y no haberse tenido en cuenta lo alegado y probado, ni los recursos utilizados por los recurrentes.

*Jurisprudencia.* Que los cargos de liquidadores no pueden confundirse con los de comisionistas, mencionadas por el Código como auxiliares del comercio; siendo aquellas gratuitas y éstas retribuidas.

**Autorizaciones para procesar.**

*Gaceta del 25.* Concediendo la solicitada por el Juez de primera instancia de Cuenca, respecto á ciertos peritos agrónomos por falsedad y otros escesos que se suponen cometidos en expediente formado sobre concesion de unos pinos, otorgada en reintegro de un crédito contra el ayuntamiento de aquella capital; y denegando la debida respecto á varios concejales del mismo ayuntamiento en el mencionado asunto.

*Motivos de la decision.* Que los peritos aparecen sospechosos del delito perseguido, al paso que nada resulta contra los concejales.

*Gaceta del 30.* Confirmando la negativa del Gobernador de la provincia de Málaga, á la pedida por el Juez de Hacienda de la misma, para procesar á un Alcalde que fue de la villa de Genaguacil, por supuestas deudas en el ejercicio de su cargo.

*Motivos de la decision.* Que las faltas atribuidas de Alcalde, deben ser corregidas gubernativamente.

*Gaceta del 31.* Declarando ser innecesaria autorizacion para procesar al Alcalde de Urdies, partido judicial de Jaca, provincia de Huesca, por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones como delegado del poder judicial.

*Motivos.* Que con arreglo al art. 7.º del Real decreto de 27 de Marzo de 1850, cuando el hecho por que se procesa á un funcionario, no es relativo al ejercicio de atribuciones administrativas, procederá libremente al Juez, con sujecion á derecho, sin mas formalidad que dar aviso al gobernador de la provincia.

*Otra.* Confirmando la negativa del Gobernador de Guadalajara á la pedida por el Juez de primera instancia de la misma capital, para procesar á un Comisario de proteccion y seguridad pública, á consecuencia de una falsa declaracion de dos vigilantes del mismo ramo; y decretando enterado en cuanto á la concedida respecto á los mismos vigilantes.

*Motivos.* Ser notoriamente falsa la imputacion que daba origen á la causa.

*Otra.* Confirmando la negativa del Gobernador de Cáceres, á la pedida por el Juez de Hacienda de la misma para procesar á un guarda rural, por supuestos abusos en el ejercicio de su cargo.

*Motivos.* Que las faltas denunciadas no resultan probadas; y que en todo caso debieran ser previamente apreciadas por el administrador de bienes nacionales del partido de Coria, quien como delegante de guarda en la materia de las faltas que se le imputan, es el único que puede conocer si las ha cometido ó no.

*Otra.* Concediendo la pedida por el Juez de primera instancia de Lérida para procesar á un Alcalde de las Borjas, por exacciones indebidas y arrestos egecutados; denegándola en otro extremo relativo, relativo á haberse exigido mayores derechos de los legales, por la redencion de la prestacion personal para la reparacion de caminos vecinales.

*Motivos.* Que aparecen ciertos los dos primeros hechos, é inexactas las que al último extremo se refieren.

*Gaceta del 1.º.* Confirmando la negativa del Gobernador de la provincia de Alicante á la pedida por el Juez de primera instancia de Villena para procesar á un Regidor del Ayuntamiento de la misma por palabras injuriosas dichas á esta corporacion municipal.

*Motivos de la decision.* Que no pueden considerarse tales palabras como injurias, ya por la falta de intencion que envuelven, ya por haber sido proferidas en sesion secreta.

*Otra.* Confirmando la negativa del Gobernador de Pontevedra á la pedida por el Juez de Hacienda de aquella capital para procesar al Alcalde de Mos por haber autorizado verbalmente al Pedáneo de San Martin de Tamega para el repartimiento de la contribucion de consumos sin las formalidades legales, y decretando enterada para la concedida respecto á este último en el mismo asunto.

*Motivos.* Que la autorizacion otorgada por el



Alcalde se limitó á la publicacion del repartimiento, en lo que puede haber cometido tan solo una falta administrativa; y que el Pedáneo se estendió á la cobranza.

*Gaceta del 2.* Confirmando la negativa del Gobernador de Valencia á la pedida por el Juez de primera instancia de Torrente para procesar al Alcalde de Beniparrell, por exaccion de multas en metálico.

*Motivos.* Que la falta del Alcalde fue motivada por no haber papel de multas en el pueblo, subsanándola tan pronto como fue posible hacerlo.

*Otra.* Confirmando la negativa del Gobernador de la provincia de Alicante, á la pedida por el Juez de primera instancia de Villena, para procesar al primer Teniente Alcalde de esta ciudad, por haberse negado á cumplir un acuerdo del Ayuntamiento.

*Motivos.* Que el acuerdo del Ayuntamiento no era egecutorio, y que la falta de cumplimiento perseguida mas que desobediencia, debe mirarse como una cuestion de competencia de atribuciones.

*Otra.* Confirmando la negativa del Gobernador de la provincia de la Coruña á la pedida por el Juez de primera instancia de la capital, para procesar al Oficial primero del mismo Gobierno, con motivo de una certificacion por él espedida.

*Motivos.* Que no parece justificado hecho alguno posible, que pueda dar lugar al procedimiento.

*Otra.* Confirmando la negativa del Gobernador de la provincia de Valencia, á la pedida por el Juez de primera instancia del distrito de San Vicente de la capital, para procesar al Alcalde de la Villanueva del Grao, por haber estorbado la egecucion de una presidencia judicial.

*Motivos.* Que el Alcalde procedió en uso de sus atribuciones.

## SECCION PARLAMENTARIA.

### REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

El Sr. ORTIZ DE ZARATE: Señores, la ley de Enjuiciamiento civil fue indudablemente un progreso en la historia de la legislacion española. Era indispensable que se recopilaran en un solo libro las diferentes leyes, y diré mas, las diferentes prácticas y doctrinas que regian en la tramitacion de los pleitos. No se puede pues negar todo

el mérito é importancia que tiene la ley de Enjuiciamiento civil. Pero al llevarse á efecto esta gran reforma legislativa, no podian menos de cometerse algunos defectos, porque es muy difícil recopilar ó recoger en un solo libro todas las leyes que estaban desparramadas y dispersas en nuestros antiguos códigos legislativos. Era pues difícil, digo, y como difícil la obra, nada tiene de particular el que en ella se encuentren defectos, defectos gravísimos que en mi opinion deben corregirse pronto para que la sustanciacion de nuestros pleitos sea tan perfecta como debe ser.

Aun cuando mi principal objeto es que se separe de la ley de Enjuiciamiento civil todo aquello que no sea de pura sustanciacion, todo aquello que sea de la ley civil, y que por consiguiente debe estar en el Código civil; interin llega el dia en que personas muy entendidas en la materia se hayan ocupado en esas reformas que han de producir un Código civil tan completo como sea dable formularle: para estas reformas no hay duda que serán oídos los tribunales, los abogados y otras personas entendidas que se hayan dedicado al estudio y hecho observaciones acerca de lo que conviene reformar; pero digo que interin llega ese dia, es indispensable que se separen algunos principios puramente civiles, que no deben entrar en una ley que debe ser puramente de sustanciacion.

La ley de sustanciacion de Enjuiciamiento civil contiene, señores, defectos en mi opinion gravísimos. Todos saben, y mas principalmente el Gobierno de S. M. y todos los Sres. Diputados que me escuchan, que las Cortes constituyentes autorizaron al Gobierno para la ordenacion y compilacion de esa nueva ley de Enjuiciamiento civil, en punto á la sustanciacion de los pleitos. Pues bien: por desgracia, no por falta de fe y buena voluntad en los autores de este código, la sustanciacion es hoy mas complicada, la sustanciacion es mas confusa que lo era anteriormente; no se consiguió el objeto principal que se propusieron las Cortes constituyentes, y menos han llegado á ser positivas y reales las esperanzas que concibió la nacion de poder sostener los pleitos con pocos gastos, con pequeñísimos dispendios.

Las materias que en mi opinion necesitan mas pronta y radical reforma son las *testamentarias*. El juicio, la tramitacion que hoy se establece por la nueva ley es complicadísima, estensa y costosa; es, en fin, la tramitacion, que, por ejemplo, podrá seguirse en la testamentaria del duque



de Medinaceli, de algun otro grande de España, de algun capitalista ó millonario. Pero en España, como en todas las naciones del mundo, las fortunas medianas y pequeñas son las que constituyen la inmensidad de toda la nacion, y estas pequeñas fortunas no pueden sufrir el juicio de testamentaria sin que éste devore y concluya con el corto capital de que se trata. La ley debe ser protectora, y con este objeto se han hecho estas leyes. Ahora bien: ¿qué sucederia si para todas las fortunas se mantuviese esa tramitación? Que acabaria con las pequeñas y medianas. Debe por tanto pensarse en una tramitación adecuada al capital que se va á dividir. Debe pues simplificarse este juicio. Es por lo mismo éste uno de los puntos en que exige pronta reforma la ley de Enjuiciamiento civil.

Decir que una testamentaria en donde hay 10, 20, 100, 1,000 millones tenga la misma tramitación que la de 4 ó 6,000 rs., eso no puede ser; encuentro que no es justo, y por consiguiente necesita grandes y prontas reformas.

Lo mismo que resulta en las testamentarias, producen gastos dispendiosos, que son completamente aniquiladores de las fortunas, los concursos. Los concursos se han tramitado suponiendo que en España quiebran solo grandes capitalistas. Esto, señores, no es cierto. La mayor parte de las quiebras son de fortunas escasísimas, y es muy duro que se las sujete á las mismas tramitaciones y formalidades que á las de grande consideracion, porque esa es la verdad; una quiebra de 100 millones tiene que seguir las mismas formalidades que otra de 2, 3 ó 10,000 rs.

Es pues indispensable, porque es muy lógico, que unas y otras quiebras tengan diferente tramitación, segun sea la cantidad que se ventile, pues es hasta ridiculo todas esas piezas, todas esas formalidades, ese nombramiento de sindicos, esa porcion de circunstancias que se exigen en las quiebras pequeñas, cuando deben abolirse por completo, y bastar con una junta que lo arregle todo con suma sencillez y pocos gastos.

Hoy los juicios de concurso ó quiebra son complicadísimos, estensos y muy costosos; tienen un sinnúmero de piezas, y no parece sino que los autores de la ley se han empeñado en que lo que no se gastará en el juicio principal se gastará en otras diligencias. Para todo se establecen piezas separadas en juicio civil ordinario, y esto es defectuosísimo y necesita una pronta correccion, y espero que así lo hagan el Gobierno de

S. M., y especialmente el Sr. Ministro de Gracia y Justicia en quien reconozco los mejores deseos.

¿Qué diré de los *desahucios*? Entre otros defectos, los desahucios tienen la misma tramitación, bien se trate de una gran finca de 30, 60 ó 100,000 rs. de renta, bien de la de 8 ó 10 cuartos diarios que produce una boardilla. ¿Es posible, señores, que esto se consienta en España? ¿Es posible que no haya diferencia entre el desahucio de una pobre habitacion á la de una finca que dé productos de mucha consideracion? Esto está en el sentimiento de todos: la tramitación debe ser mas sencilla, mas breve, porque nadie puede querer que para el desahucio de una finca que produce 30 reales al mes, gaste mucho mas el interesado en el simple otorgamiento del poder que al procurador otorgue.

Los *términos* es otro defecto gravísimo. Se ha creido que haciendo los plazos breves se adelantaba mucho en la administracion de justicia. Los términos de cuatro dias, diez, veinte, para una diligencia, mirado así en absoluto, pudiera parecer bastante, porque un juez de primera instancia podria dar en ocho dias una sentencia, si no tuviera otra cosa que hacer, si no se ocupase mas que de un expediente y de dar sentencia sobre aquel; pero como no se hallan en este caso los jueces, sino que tienen que sustanciar y fallar una multitud de expedientes civiles y además están sobrecargados de causas criminales, los plazos no pueden ser tan breves como se quiere. La ley les obliga á que den una sentencia en un tiempo tan rápido, tan breve, que á veces resuelven los expedientes sin tener un completo conocimiento de ellos, sin saber de lo que se trata, y sin saber si dar la razon á quien se la han dado ó debieran dársela á la parte contraria.

Creo pues que los términos no deben ser tan cortos, y menos de veinticuatro horas que se fija para dar la sentencia en algunos juicios: veinticuatro horas no es nada para un juez recargado de negocios; si no tuviera mas que aquel negocio, claro es que podria en ese tiempo dictar la sentencia; pero hay que contar con que tiene otros muchos. Y no importa, señores, que el juicio dure un mes mas ó menos, siempre que la justicia se administre bien y con rectitud y se dé á cada uno su derecho. No creo yo que debe sacrificarse á una rapidéz exagerada la verdadera justicia y el interés de los litigantes.

*Las discordias.* Discordia y administracion de justicia son dos cosas que no comprendo. Decir



que un tribunal ha de discordar, es cosa, repito, que no comprendo, y creo que se viene diciendo en leyes muy antiguas. Yo creo que en la ley de Enjuiciamiento debia haberse abolido esta palabra, que debe desaparecer del diccionario de la jurisprudencia española.

La discordia desacredita al tribunal, pues hace que se tenga que ver dos ó tres veces un negocio, y que se gaste en él como en dos ó tres pleitos.

Además, la sentencia que viene despues de dos, tres ó cuatro discordias (porque hasta este número de casos se ha visto en una Audiencia), bien puede decirse que es una cosa perjudicial.

Por consiguiente dos, tres y cuatro discordias suponen dos, tres y cuatro vistas, dos, tres y cuatro defensas, y luego la defensa sale sin fuerza y sin vigor, y el que ha perdido el pleito en virtud de ella, cree tener mucha razon, porque no seria mucha la justicia de su contrario cuando ha sido necesario someter el asunto á tres ó cuatro vistas.

Yo creo que los tribunales deben estar organizados de tal manera que nunca puedan discordar.

Esto es muy fácil y sucede todos los dias en cualquiera corporacion. Desde el momento en que los tribunales sean impares y la mayoría forme sentencia, no habrá discordia, y efectivamente no debe haberla, porque repito, que es una cosa que desacredita la administracion de justicia.

Tambien la ley de Enjuiciamiento ha dado una deplorable latitud al *recurso de nulidad ó de casacion*.

Si la casacion ha de tener el prestigio que merece, si se ha de formar la jurisprudencia que se desea, y si el Tribunal Supremo de Justicia ha de tener tiempo bastante para conocer y juzgar los negocios de casacion, es preciso que no se abuse de este recurso, que se escatime, y que solo se conceda en negocios graves y en casos marcadísimos, con mucho detenimiento y mucha parsimonia.

Pues la ley de Enjuiciamiento civil hace precisamente todo lo contrario.

Ha abolido la tercera instancia: pero en sustancia no la ha abolido, no ha hecho mas que cambiar lo que antes era súplica en recurso de casacion. Esto tambien desacredita á la administracion de justicia, toda vez que por cualquiera pequeñez se ocupa nada menos que el Tribunal Supremo, el cual no puede atender, es imposible que atienda, á tanto recurso de casacion y nulidad como todos los dias se le están enviando. Es

preciso, por tanto, circunscribir el recurso de casacion á los límites prudentes, á los negocios graves é importantes.

La ley de Enjuiciamiento civil, despues de dar una latitud inmensa al recurso de casacion, duplica el trabajo al Tribunal Supremo de Justicia, porque antiguamente en estos recursos solo fallaban sobre si habia ó no nulidad, y declarada que era la nulidad volvian los autos á la Audiencia, y ésta fallaba sobre lo principal. Actualmente no sucede así. El Tribunal Supremo de Justicia resuelve sobre si há ó no lugar á la casacion, y cuando ha declarado esto, resuelve sobre la cuestion principal. De manera que se puede decir que para cada cien negocios que vienen al tribunal, tiene éste que trabajar como para dar doscientas sentencias si en todos esos pleitos há lugar el recurso de casacion.

Las *pruebas*, señores, están hoy como antiguamente. Se han escatimado los plazos que deben ser latísimos, porque la prueba es todo el pleito, toda la defensa, y á nadie deben escatimarse estos términos. Las pruebas así ultramarinas como las que hay que hacer en el extranjero, están hoy como en aquellos tiempos en que antes de emprender un viaje se hacia testamento. Los autores de la ley de Enjuiciamiento no han tenido presente sin duda la gran modificacion que han introducido en la sociedad actual el vapor, los caminos de hierro y ese afan de viajar. Hoy es necesario conceder la prueba casi con tanta latitud en España como en el extranjero, porque en muchos asuntos es preciso para hacer las pruebas apelar á personas que están en Lóndres, en París ó en América, y es necesario oirlas para que aquellas sean completas. Los autores de la ley se han olvidado de todo esto, y hasta tal punto, que tambien han dejado las pruebas de segunda instancia. Esto, señores, yo no lo encuentro justo. Si se quiere que las pruebas sean lo que deben ser, solo deben admitirse en primera instancia; allí debe probar el interesado lo que crea conveniente; pero admitir pruebas y otras segundas ó terceras instancias, es echar abajo por completo la tramitacion. Así hoy, señores, como hay segunda instancia, sucede con frecuencia que un juez que falla en primera por las pruebas que tiene á la vista y que falla con razon y justicia, ve despues revocado su fallo, porque cuando éste se lleva á la Audiencia, se presentan nuevas pruebas, en virtud de las cuales se revoca el fallo, dándose lugar á creer que se ha fallado mal.



Y esto sin embargo no es cierto, porque ese mismo juez con las pruebas que la Audiencia ha tenido á la vista, hubiera dado tambien otra sentencia. Pero entonces ¿qué sucede, señores? Que no hay segundas instancias, y que si se permite que puedan ampliarse las pruebas de la primera, no vienen á ser segundas instancias, sino otras nuevas. En mi opinion, el sistema que considero como mas económico, como mas útil y racional, es dar una prueba amplísima en primera instancia; conceder en ésta todos los términos que se dan en ella y la segunda, y pasado el término de prueba, no permitir que se haga ampliacion alguna. Entonces la segunda instancia se limita á lo que debe, á rever el expediente, y sin hacer nada nuevo, confirma el fallo si está bien, y lo revoca si está mal. Esto lo encuentro lógico, racional y económico, aunque no sea conforme á lo que han establecido legislaciones anteriores á la actual.

Pero prescindiendo de estos grandes defectos de mera tramitacion, me voy á ocupar mas principalmente del fin de la proposicion que estoy sosteniendo. Los autores del Código de Enjuiciamiento, además de haber establecido una tramitacion completamente contraria á la que debemos exigir en este trabajo, han incurrido en otro defecto, han confundido la declaracion de derechos con lo que es el medio de poner en ejercicio estos mismos derechos, por haber incurrido en este defecto hay una porcion de artículos que son declaraciones puramente civiles, que no deben estar en la ley de Enjuiciamiento.

Más digo, los autores de la ley de Enjuiciamiento civil no estaban autorizados para hacer esto, sino unicamente para *arreglar y compilar todas las leyes del Enjuiciamiento*, y de ningun modo para variar las leyes civiles. Sin embargo lo han hecho.

El art. 279 de la ley de Enjuiciamiento civil enumera los medios de prueba. Sabe cualquiera persona que se ocupe de estas materias, que la designacion de los medios de prueba no corresponde á la ley de Enjuiciamiento sino á la ley civil, que marca cómo se han de probar los hechos, comenzando desde las partidas de bautismo, testamentos, contratos y cualquiera otro acto puramente civil. Es pues propio de la ley civil, y no de la tramitacion, el dictar estas disposiciones. Se puede consentir, y estaria en su lugar, que en la ley de Enjuiciamiento se enumeren los medios de prueba, pero siempre con referencia al Código civil, y solamente como un medio supletorio. Por

eso propongo yo que ese artículo se modifique y se diga que son éstos los medios de prueba, pero salvos siempre los que hubiesen establecido las leyes civiles, y sin perjuicio de éstas.

El art. 356, tratando del juicio de abintestato, ordena la ocupacion de los libros, bienes y papeles de los que fallezcan intestados sin descendientes, ni ascendientes, ni parientes colaterales dentro del cuarto grado.

Esta disposicion civil, contenida en una ley de Enjuiciamiento, ha modificado una ley que no podia modificar. Sabido es que en algunas provincias de España donde hay leyes especiales, los viudos tienen la comunidad de bienes con los de su consorte, una vez que hubiesen tenido hijos, y en otros los viudos gozan de lo que se ha llamado viudedad, ó sea del usufructo de todos los bienes que forman el patrimonio conyugal. Pues segun este artículo, los viudos que tienen derecho á los bienes de la sociedad conyugal, tienen que verse despojados de los bienes y papeles que fueron de su consorte para los cuales ha de nombrarse por administrador á una persona estraña. Ha modificado pues una ley civil, cosa que no podia hacer.

El art. 359 es ampliatorio del 356, y previene el nombramiento de albaceas, formacion de inventarios y exámen de papeles. Se halla en el mismo caso que el que antes he examinado, y las mismas razones que acabo de manifestar son aplicables al artículo presente. Cuando hay un viudo ó viuda, que tiene derecho al usufructo de todos los bienes, y á veces hasta á la propiedad, no hay razon para que se le prive de este derecho, se entreguen los bienes á una persona estraña, y se nombre un albacea encargado de atender al entierro de su esposo y que cuide de sus libros y papeles. Ir á la casa de una pobre viuda y arrancarle sus bienes, libros y papeles, y todavia ver que se va á nombrar una persona estraña para que cuide del entierro de su esposo, esto es hasta inhumano. Es menester respetar siempre, y mucho mas en aquellos momentos, á la esposa ó al marido que acaba de perder á la compañera de toda su vida. Debe pues corregirse esta disposicion de la ley de Enjuiciamiento civil.

El art. 592 habla del concurso de acreedores y señala las clases de éstos: dice que sean cinco, y que los síndicos los presenten en cinco estados. Hé aquí otro de los defectos de la actual ley de Enjuiciamiento. El fijar los acreedores y sus clases, no corresponde á la ley de Enjuiciamiento; eso lo señala la ley civil; y tan cierto es esto, que



según ésta, hay mas clases de acreedores que las cinco que fija la nueva ley del Enjuiciamiento. En el *proyecto del Código civil*, publicado ya por el Gobierno, se establecen hasta siete grados de acreedores; y si mañana aprobamos el proyecto de ley que se ha presentado sobre libertad de imprenta, tendremos otra clase mas de acreedores especialísima. Por esa ley se obligan las prensas y útiles de un impresor á las resultas de los delitos de imprenta: por consiguiente habrá una clase mas especialísima de acreedores, que no cabe dentro de los cinco estados que la ley de Enjuiciamiento señala. Por eso, en vez de decir esta ley que haya cuatro ó cinco clases de acreedores, no puede ordenar otra cosa sino que los síndicos presenten la relacion de acreedores con el orden de preferencia que les corresponda según las leyes civiles. Todo lo que sea otra cosa, no es justo.

Además, señores, y esto es una cosa ridícula, en los juzgados muchas veces, en casos de quiebra ó concurso en que no hay esas cinco clases de acreedores, sino tal vez una sola, sucede que por efecto de esta ley, se pone «Estado núm. 1.º; no hay ningún acreedor.» «Estado núm. 2.º; no hay ningún acreedor,» y así de los demás en que no los hay. Esto, repito, que es hasta ridículo, y se evitaba no haciendo estados de acreedores mas que de las clases en que los haya, y de ningún modo de las clases en que no los hay.

(Se concluirá.)

## Variedades.

Desde primeros de Marzo último se publica una nueva Revista de jurisprudencia administración, notariado é instrucción pública dirigida por D. Agustín María de la Cuadra y D. Francisco Pages del Corzo, de la que hemos recibido ya varios números conteniendo notables artículos. Creemos complacerá á nuestros lectores la lectura de uno de éstos que dejamos transcrito en la parte doctrinal del presente número. La nueva publicación se titula *El Foro Sevillano*; tiene mucha analogía con la nuestra, y corresponde al deseo que anunciamos al comenzar nuestros trabajos: el que en el territorio de cada Audiencia haya un periódico consagrado á los intereses de la buena administración de justicia, y que al par que un registro en que se consignen las respectivas prácticas para que puedan cotejarse, discutirse y uni-

formarse, sea un palenque en que se esclarecen los principios de la ciencia. Damos, pues, á nuestro nuevo colega el mas sincero parabien por su aparición en el estadio de la prensa jurídica, deseándole todo el buen éxito que se merece, y recomendando su adquisición á cuantos cultivan el estudio de nuestra profesion.

*El Foro Sevillano* se publica cuatro veces al mes, por precio de 6 rs. en Sevilla, y 20 fuera, por trimestres adelantados.

Ha visto la luz pública *El Eco de la Ley*, periódico de jurisprudencia, administración y notariado, para ausiliar á los funcionarios de estas tres órdenes en el ejercicio de sus cargos, y velar constantemente por sus intereses. La índole de esta publicación, el objeto que se propone, y la amistad con que nos honra alguno de sus ilustrados redactores, nos imponen el grato deber de recomendarle á nuestros lectores. Se suscribe en las principales librerías del reino, y en Madrid por medio de libranza ó sellos á la administración, calle del Olivo, 16, 2.º

El crecido número de periódicos jurídicos que se publican en nuestra patria es una prueba evidente de su importancia, y nos anima á publicar en todos nuestros números una ligera revista de su contenido, con lo que nuestros lectores podrán tener constante noticia de las cuestiones que se debatan en la prensa periódica. Comenzará esta revista en el número próximo.

Damos las mas espresivas gracias á aquellos de nuestros colegas que nos honran trasladando á sus columnas algunos de nuestros artículos, especialmente al *Restaurador del Notariado*.

Por lo no firmado y por la sección de variedades,  
Eduardo Atard.

EDITOR RESPONSABLE, Lic.<sup>do</sup> D. José Marco.

Valencia: Imprenta de José Riús, plaza de S. Jorge.— 1859.